

S-2023

Procedimiento:

Demandante:

Demandada:

Radicado:

Asunto:

Ejecutivo

Juan Sebastián Berger Castrillón

Diego Serrano Martínez y Julia Patricia Ríos hoyos

05001 31 03 001 2020 00005 01

Confirma sentencia impugnada

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, cinco (05) de octubre del mil veintitrés (2023).

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte plural ejecutada frente a la sentencia fechada el 23 de noviembre de 2022, mediante la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín dirimió la controversia en el proceso ejecutivo instaurado por Juan Sebastián Berger Castrillón en contra de Diego Serrano Martínez y Julia Patricia Ríos Hoyos, trámite al que se acumuló el proceso ejecutivo con título hipotecario, adelantado por Bancolombia S.A. en contra de aquéllos. Función juzgadora que se acomete en el siguiente orden:

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes. El día 19 de diciembre de 2019, el señor Juan Sebastián Berger Castrillón presentó demanda ejecutiva en contra de Diego Serrano Martínez y de la señora Julia Patricia Ríos Hoyos, pretendiendo que se librara mandamiento de pago en contra de estos últimos, por la suma de **\$321.418.056**, obligación respaldada en un pagaré suscrito por el señor Martínez en nombre propio y como mandatario de su cónyuge Julia Patricia, título valor otorgado para garantizar el pago de dicha suma que ascendió inicialmente a \$378.918.056, a la que se le realizó un abono de \$57.500.000, los cuales fueron imputados al capital.

Explica el ejecutante, que el poder general mediante el cual actúa el señor Diego Serrano Martínez para representar a la señora Julia Patricia Ríos Hoyos, se constituyó mediante escritura pública # 1869 del 18 de Julio de 2012 de la Notaría Octava De Medellín, sin que a la fecha ninguno de los demandados haya realizado el pago de la obligación que se torna clara, expresa y exigible. Que se pactaron intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida por la ley, contados a partir de la fecha en que se llenaran los espacios en blanco del pagaré, lo que ocurrió el 1° de diciembre de 2019.

1.1. Demanda acumulada. Bancolombia S.A., presentó demanda ejecutiva en contra de la señora **Julia Patricia Ríos Hoyos**, por cuanto ésta se obligó con dicha entidad financiera, mediante la suscripción de los siguientes títulos valores: **1. PAGARÉ 10990306500:** Suscrito el 16 de marzo de 2017, por la suma de **\$229.427.000,00 M.L.**; **2. PAGARÉ SIN NÚMERO:** Otorgado el 20 de junio de 2017, el cual fue llenado de acuerdo a la carta de instrucciones, por la suma de **\$30.000.000,00 M.L.**; **3. PAGARÉ 90000023853:** Suscrito el 20 de febrero de 2018, por la suma de **\$291.600.000,00 M.L.** en algunos de ellos se pactaron intereses de plazo y moratorios.

Por Escritura Pública **2.164 del 6 de marzo de 2017** y **16.909 del 6 de diciembre de 2017** -ambas de la Notaría 15 de Medellín-, la deudora garantizó todas las obligaciones derivadas de los títulos valores que se acompañaron con la demanda, mediante hipoteca abierta de primer grado sobre los bienes identificados con matrícula inmobiliaria **001-1252265 y 001-1288160**, para garantizar el pago de los créditos, inmuebles perseguidos en éste proceso ejecutivo que adelanta Juan Sebastián Berger Castrillón en el Juzgado 1º Civil del Circuito de Medellín contra los aquí demandados, razón por la cual se activó la cláusula aceleratoria.

El banco expresó que se realizaron abonos a las obligaciones y solicitó librar mandamiento de pago de la siguiente manera:

1. PAGARÉ 10990306500:

1.1. CAPITAL: Por la suma de **\$96.348.423,28 M.L.**

1.2. INTERESES DE MORA: Que se paguen a mi representado los intereses moratorios, liquidados **a partir de la fecha de la presentación de la demanda**, sobre el saldo insoluto de capital a la fecha del pago, a razón de una tasa de mora, equivalente a una y media (1.5) veces el interés remuneratorio vigente, sin que exceda la tasa del uno punto cinco (1.5) veces el interés bancario corriente y en caso de que el interés de usura sea inferior, se tendrá este último límite como la tasa de interés de mora. Para este caso y a partir de la fecha de presentación de esta demanda la tasa de mora es del **17.18%** efectiva (...)

2. PAGARÉ SIN NÚMERO:

A. CAPITAL: Por la suma de **\$30.000.000,00 M.L.**

B. INTERESES DE MORA: Liquidados sobre el saldo insoluto de la obligación a partir del **13 de agosto de 2021** y hasta la fecha del pago, a la tasa del **22.99%** efectiva anual o a la tasa máxima legal permitida (...)

3. PAGARÉ 90000023853:

1.3. CAPITAL: Por la suma de **\$87.939.556,47 M.L.**

1.4. INTERESES DE MORA: Que se paguen a mi representado los intereses moratorios, liquidados **a partir de la fecha de la presentación de la demanda**, sobre el saldo insoluto de capital a la fecha del pago, a razón de una tasa de mora, equivalente a una y media (1.5) veces el interés remuneratorio vigente, sin que exceda la tasa del uno punto cinco (1.5) veces el interés bancario corriente y en caso de que el interés de usura sea inferior, se tendrá este último límite como la tasa de interés de mora. Para este caso y a partir de la fecha de presentación de esta demanda la tasa de mora es del **15.38% efectiva**.

2. Actuación procesal. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, Despacho judicial que, mediante providencia del pasado 30 de enero de 2020 libró mandamiento de pago, en la forma solicitada. En igual sentido se pronunció el juzgado, el pasado 24 de noviembre de 2021, para la demanda de acumulación presentada por Bancolombia S.A.

3. Oposición de los demandos. El demandado Diego Serrano Martínez, frente a la demanda presentada por Juan Sebastián Berger Castrillón, admitió que existió una relación comercial con el ejecutante que se extendió entre los años 2013 y 2019, relacionada con la administración de 15 vehículos tipo taxi, por lo cual en algunas ocasiones el señor Berger actuó como administrador, en otras como arrendatario y, en otras, como mandatario. Tratándose de las actividades en las que fungió como administrador y como mandatario, siempre actuó por cuenta y riesgo de los codemandados, labor por la cual se le pagaron los respectivos honorarios.

El apoderado de Serrano hizo énfasis en que el señor Diego fue engañado al suscribir el título, ya que lo que él pensaba que estaba firmando era tan solo un poder para divorciarse y que “...*algunas actividades encomendadas al señor Berger, fueron a título gratuito y por encargo directo del señor Diego Serrano, otras fueron por mera liberalidad del señor Berger, dada la estrecha relación de amistad que se formó entre el apoderado general de la señora Julia y aquél. Como se indicó en la introducción del presente escrito, la amistad entre Serrano y Berger, llegó a tal punto, que en no pocas ocasiones el señor Berger acompañó personalmente al señor Diego Serrano y compartieron: Fiestas, viajes, restaurantes, hoteles, festejos con damas de compañía, todas actividades recreativas y turísticas que disfrutaban juntos, por cuenta absoluta del señor Diego Serrano...*”.

Como excepciones formuló las que se dio en llamar: **i)** falta de causa para pedir e, **ii)** inexistencia de la obligación.

Entre tanto, la señora Julia Patricia Ríos Hoyos contestó la demanda para detallar la relación comercial y de amistad que surgió entre el ejecutante y el señor Diego Serrano Martínez, ante cuyo rompimiento se optó por vender la totalidad de los vehículos de servicio público, donde el señor Berger se encargó de conseguir a los compradores, recibía el precio, retenía una comisión por cada enajenación y, finalmente, quedó con un remanente de 57.000.000 a favor de la pareja Serrano Ríos.

Como excepciones blandió las que se dio en llamar: **i)** Ausencia de poder para comprometer cartularmente a Juliana; **ii)** inexistencia de la obligación.

3.1. Entre tanto, la señora Julia también se opuso a la demanda de acumulación, presentada por Bancolombia S.A., limitándose a formular las excepciones que denominó: **i)** los pagarés presentados carecen de los requisitos establecidos en la Ley 1564 y Código de Comercio; **ii)** inexistencia de los endosos en procuración; **iii)** falta de poder o inexistencia de legitimación en el ejercicio de la acción real; **iv)** ausencia de mora e, **v)** imposibilidad de cobro de intereses de plazo.

4. La sentencia impugnada. Agotado el trámite probatorio y legal pertinente, el juez *a-quo* profirió sentencia el pasado 23 de noviembre de 2022, en la que declaró **no** probadas las excepciones formuladas y, en consecuencia, ordenó seguir adelante la ejecución en los procesos acumulados en favor de ambos demandantes y en contra de ambos demandados así: *“...seguir adelante la ejecución a favor de los demandantes JUAN SEBASTIÁN BERGER CASTRILLÓN y BANCOLOMBIA S.A. y en contra de los demandados DIEGO SERRANO MARTÍNEZ y JULIA PATRICIA RIOS HOYOS, de la siguiente manera: A) **El primer mandamiento ejecutivo de pago, en favor del demandante: JUAN SEBASTIÁN BERGER CASTRILLÓN** y en contra de ambos demandados: DIEGO SERRANO MARTÍNEZ y JULIA PATRICIA RIOS HOYOS, la suma de **\$321.418.056.00** por concepto de CAPITAL y por los intereses moratorios causados y no cancelados a partir del 01 de diciembre de 2019 que se liquidaran a la tasa máxima resultante de aplicar el artículo 884 del C. de Co., modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999, o lo que es lo mismo, el interés bancario corriente que para cada periodo certifique la superintendencia bancaria más un 50%.*

B) El segundo mandamiento ejecutivo de pago, en favor del demandante BANCOLOMBIA S.A., y en contra de la demandada JULIA PATRICIA RIOS HOYOS

1. **PAGARÉ 10990306500**, por la suma de **\$96.348.423,28 M.L.**, más los **INTERESES DE MORA**, los cuales se liquidarán a partir de la fecha de la presentación de la demanda, es decir desde el 21 de agosto de 2021, sobre el mencionado saldo insoluto de capital, a razón de una tasa de mora, equivalente a una y media (1.5) veces el interés remuneratorio vigente, sin que exceda la tasa del uno punto cinco (1.5) veces el interés bancario corriente y en caso de que el interés de usura sea inferior, se tendrá este último límite como la tasa de interés de mora. Para este caso y a partir de la fecha de presentación de esta demanda a la tasa de mora es del 17.18% efectiva.

2. **PAGARÉ SIN NÚMERO**, pero distinguido bajo su código de barras como **Q 0000000035696165027001**: CAPITAL: Por la suma de **\$30.000.000,00 M.L.**, más los **INTERESES DE MORA**, que se liquidarán sobre el saldo insoluto de la obligación a partir del 13 de agosto de 2021 y hasta la fecha del pago, a la tasa del 22.99% efectiva anual o a la tasa máxima legal permitida.

3. **PAGARÉ 90000023853**: CAPITAL: Por la suma de **\$87.939.556,47 M.L.**, más los **INTERESES DE MORA**, que se liquidarán a partir de la fecha de la presentación de la demanda, es decir desde el 21 de agosto de 2021 sobre el saldo insoluto de capital a la fecha del pago, a razón de una tasa de mora, equivalente a una y media (1.5) veces el interés remuneratorio vigente, sin que exceda la tasa del uno punto cinco (1.5) veces el interés bancario corriente y en caso de que el interés de usura sea inferior, se tendrá este último límite como la tasa de interés de mora. Para este caso y a partir de la fecha de presentación de esta demanda la tasa de mora es del 15.38% efectiva.

Luego de una semblanza de los hechos y pretensiones de la demanda, comenzó el *a quo* por estudiar los elementos del título valor que se cobra, encontrando acreditados los requisitos generales anclados en el artículo 621 y los particulares establecidos en el artículo 709 y 671 del Código de Comercio, en relación con la claridad, expresitud y exigibilidad de dicho pagaré, también en aquellos eventos en que se presentan con espacios en blanco, los cuales, bien podrían ser enervados por la parte demandada, a partir de la prueba de la desviación de la respectiva carta de instrucciones.

De este modo, a partir del análisis de la prueba documental practicada en la instrucción del proceso y de la prueba testimonial ofrecida por las partes de la lid, no halló demostrada ninguna de las excepciones formuladas, sobre todo, la encaminada a probar que el accionado no sabía lo que firmaba, muy a pesar de los parámetros y facultades otorgadas a través de los poderes generales dados por el demandado en las escrituras públicas 1869 del 18 de julio de 2012 y 1303 del 20 de julio de 2017, siendo que se trataba de un avezado comerciante y que, de todas maneras, no puso en conocimiento de las respectivas autoridades la posible tipificación de un delito, así como tampoco se demostró que sufriera de algún trastorno mental que le impidiera comprender la obligación que asumía al firmar un pagaré en blanco.

Frente a la falta de causa para pedir e inexistencia de la obligación, indicó que el origen del pagaré se dio a partir del contrato celebrado entre los señores Juan Sebastián Berger Castrillón y Diego Serrano Martínez, bajo una circunstancia especial de amistad y confianza mutua surgida entre ellos, derivada de “...las circunstancias en que se encontraba el señor Serrano Martínez que era *un extranjero que mantenía su residencia y domicilio en España y que ocasionalmente cada 2 o 3 meses, conceder un pagaré de este importe, para atender como lo dije el documento antes transcrito cualquier deuda cualquier indemnización, o cualquier prestación social, incluyendo intereses para los mismos, es perfectamente lógico pensar que a quien se le ha conminado, se la ha encargado la administración de unos bienes, tenga esa disponibilidad dineraria para atender todo este tipo de situaciones en nombre de una persona que no se encuentra en el país...*”

Seguidamente, pasó a estudiar la contestación a la demanda ejecutiva hipotecaria, ante lo cual estimó que, a la postre, no se formularon genuinas excepciones que tendieran a enervar la pretensión, pues la ejecutada solo se limitó a enumerar ciertos requisitos que por ley debían tener los títulos valores, sin exponer inconformidad alguna, de ese modo, detalló el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley en cada uno de los pagarés, tanto el presentado por el demandante Berger Castrillón, como los presentados para el cobro por la entidad bancaria, así como el cumplimiento de la condición establecida en la cláusula aceleratoria para el evento en que los bienes cautelados fueran objeto de persecución en otro proceso.

4. El recurso de apelación. La parte ejecutada recurrió la sentencia. Así, concedido el recurso de apelación en primera instancia, el mismo fue admitido por

este Tribunal, seguidamente, se otorgó el término de rigor para la sustentación, el cual recorrió de la forma como pasa compendiarse:

4.1. La señora Julia Patricia Ríos Hoyos dijo haber alegado las excepciones personales fundadas en los numerales 12 y 13 del artículo 784 del Código de Comercio, de esta forma, remitió al punto 2 de la carta de instrucciones, para advertir que no tiene ningún soporte de alguna autoliquidación que haya hecho el demandante principal y que tenga que ver con salarios o acreencias laborales de cualquier tipo, reprochando que no podía hacerlo, ya que: *“...El demandante apoya ese monto en una “autoliquidación” que realiza de manera autónoma y arbitrariamente, con base en una supuesta relación laboral con la parte demandada. “Autoliquidación” cuyo soporte documental no aparece por ninguna parte en el plenario, tampoco justifica ese monto, ni acredita extremos temporales ni conceptos laborales que identifiquen pormenorizadamente, salarios, primas, vacaciones, uniformes, calzado, pago de prestaciones sociales, etc...”*

Que, en relación con la administración de los taxis, el juez tampoco echó de ver que el actor prestó *“...el servicio con total independencia y autonomía. Tajantemente las partes acordaron que no existiría relación laboral alguna...”*. Señala, entonces, que la parte demandada cumplió con la carga probatoria, al demostrar plenamente que el pagaré no tiene una causa y, no solo se quedó en una negación indefinida, sino que está acreditado plenamente, que si algún derecho tiene el beneficiario del pagaré, solo y exclusivamente lo puede reclamar frente a BOIRA S.A.S., pero nunca frente a terceras personas, ya que el actor sólo ha tenido relaciones contractuales con la persona jurídica denominada BOIRA S.A.S., nunca con personas naturales.

4.2. Por su parte, el señor Diego Serrano Martínez adujo que La ley no habilita al tenedor del título en blanco para llenar la carta de instrucciones, razón por la cual el juez de la causa desconoció la infracción al artículo 622 segundo inciso del código de comercio.

De otro lado sostiene que la excepción derivada del negocio causal descansa sobre *“...un hecho inexistente, esto es deudas laborales, la carga de la prueba se invierte, justamente en ese momento del debate procesal, y el demandante ha debido soportar debidamente la existencia de la causa que dio origen al pagar base de recaudo. No es el demandado, **el llamado a probar lo que no existe**, la causa para haber anotado la suma que se plasmó en el pagaré esgrimido, ha debido ser el fundamento para acceder*

a la continuación con la ejecución y la declaratoria de la no prosperidad de las excepciones planteadas...”

Que, el demandante apoya ese monto en una “autoliquidación imaginaria” que realiza de manera autónoma y arbitraria, con base en una supuesta relación laboral inexistente, pues los contratos esgrimidos son de prestación de servicios, no laborales con la parte demandada, tampoco se acreditan “...los extremos temporales ni conceptos laborales que identifiquen pormenorizadamente, salarios, primas, vacaciones, uniformes, calzado, pago de prestaciones sociales...”

Que, “...el fallador de primera instancia, tampoco observó que esos contratos, aparentemente de administración, realmente correspondían, según cláusula tercera, a contratos de arrendamiento, ya que el demandante se comprometía a cancelar mensualmente la suma de \$1'050.000 por cada taxi...” en todo caso, la relación contractual fue con la sociedad BOIRA SAS, no con el demandado.

Que el señor Juez “...no se detuvo en el análisis del contenido y los pormenores de los relatos de Susana Correa Ríos y Jhon Fredy Ríos Hoyos, por lo menos para identificar las coincidencias y las razones que sumadas a la sana crítica y reglas de la experiencia, muestran claramente la inexistencia de la causa que sirvió de base de recaudo...”, reiterando que el alegato de la excepción tiene como finalidad evitar fraudes y desafueros.

Culmina señalando que “...Fundar la decisión de no dar probada la excepción propuesta de inexistencia de la causa, **con fundamento en la apreciación de unas relaciones personales entre demandante y demandado, sin tener en cuenta las demás pruebas practicadas, en su conjunto**, denota una parcialidad proscrita en nuestro ordenamiento, al momento de la valoración de la prueba, con tal conducta **se vulnera el principio de integralidad de la prueba**, el cual indica que el fallador ha de examinar tanto lo favorable como lo desfavorable, a la causa que se examina...”.

Esbozados de esta manera los antecedentes que dieron lugar a la decisión recurrida y las razones de disenso que sustentan la alzada, procede la Sala a desatar el recurso con fundamento en las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

1. Presupuestos procesales. Del examen preliminar realizado al proceso, se establece que los diversos presupuestos procesales concurren a cabalidad para

dictar el fallo de mérito que desate la impugnación vertical, de igual manera, no se observa alguna irregularidad que afecte la validez de la actuación desarrollada.

1.1. Precisión preliminar sobre la delimitación de la competencia. Averiguado está que la competencia del juez de segunda instancia, en línea de principio, está enmarcada por los reparos que el apelante haya hecho a la providencia cuestionada, al tiempo que el interés del apelante siempre deberá ir vinculado a lo desfavorable del fallo, sin que sea posible al juez de segunda instancia adentrarse en otros asuntos, salvo que ello sea vinculante con la repulsa planteada.

En consecuencia, la decisión del asunto en segunda instancia se tomará conforme las disposiciones que sobre el tema indica el artículo 328 del C. G. del P., por ende, no se extenderá la revisión a los temas que **no** fueron objeto de repulsa¹, concretamente, los motivos que llevaron al funcionario a continuar con la ejecución respecto de los pagarés presentados en la demanda de acumulación por la entidad bancaria, al hallar estructurados los requisitos establecidos para ello, lo que demuestra conformidad de la parte interesada sobre lo decidido frente a tal tópico, estableciéndose de esta manera un infranqueable lindero para la competencia del tribunal, respecto de lo resuelto en la sentencia frente a dicho proceso acumulado.

Con este epígrafe, veamos algunas breves consideraciones acerca del instituto jurídico en cuestión.

2. Título ejecutivo. Resulta trascendental destacar que para predicar que un título presta mérito ejecutivo, es menester que el documento aportado con la demanda para su cobro reúna los requisitos de que trata el artículo 422 del C. G. del P., es decir, *que sea claro, expreso y exigible, pero además, el artículo expresa que: “Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184...”*

¹ Ello encuentra asidero, además, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia fechada el 8 de septiembre de 2009, con ponencia del Dr. EDGARDO VILLAMIL PORTILLA, en la que se dijo en parte pertinente, que: “...El recurso de apelación tiene un “objeto” delimitado, de modo que la inclusión de las “razones de la inconformidad”, deja zonas del litigio fuera de la impugnación, a las cuales el juez no puede acceder mediante una actividad inquisitiva que le permita sustituir al recurrente en la delimitación del “objeto” del recurso...”

El ser **expreso** implica que se plasme en el documento las personas del deudor y del acreedor, como también debe expresarse la obligación que se contrae, su calidad y monto, así como el plazo en que debe cumplirse la obligación, todo lo cual deberá aparecer en forma inequívoca en el título, significando esto que **las obligaciones implícitas** no pueden ser demandables por vía ejecutiva; de ahí que lo expreso conlleve a la claridad, es decir, que la obligación sea **clara**, que sus elementos constituidos y su alcance emerjan de la lectura misma del título, hasta el punto que no se necesiten esfuerzos de interpretación para establecer cuál es la obligación y la conducta que puede exigirse al deudor y; la tercera condición es la **exigibilidad**, que es la calidad que la pone en situación de pago, solución inmediata, en cuanto que de existir plazo o condición ya estén cumplidos o, simplemente, por tratarse de una obligación pura y simple.

Digamos entonces que, de acuerdo con el art. 709 del C de Co. el pagaré se caracteriza porque contiene una promesa incondicional de pagar una suma de dinero, a lo cual es válido añadir el comentario de Gerardo José Ravassa Moreno, en su obra de los Títulos Valores Nacionales e Internacionales, Edit. Doctrina y Ley 2006, pag.355 que: *“Como en el pagaré el girador y el girado son la misma persona, o sea, el que llamamos otorgante, el pagaré constituye una promesa y no una orden de pago como sucedía o podía suceder en la letra (porque no necesariamente la letra tiene que contener una orden, también puede coincidir el girador y el girado y entonces exhibe una promesa de pago). Por esta misma razón, el otorgante del pagaré se equipara al aceptante de la letra. Al ser la misma persona quien ocupa ambas posiciones, el pagaré nace aceptado.”*

3. Del principio de autonomía en los títulos valores. Naturaleza, función y aplicación. El artículo 619 del Código de Comercio define los títulos valores como los *“documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora”*. A partir de esa definición legal, la doctrina mercantil ha establecido que los elementos o características esenciales de los títulos valores son la incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomía.

En ese mismo sentido, bajo el imperio de los ritos comerciales, ha sido copiosa tanto la doctrina como la jurisprudencia al otorgarle un carácter principalístico a tales elementos, dentro de los cuales destacamos el de la autonomía, bajo esta connotación, dicho principio versa sobre el ejercicio independiente del derecho incorporado en el título valor, por parte de su tenedor legítimo.

A su vez, estas consideraciones resultan armónicas con lo preceptuado por el artículo 627 del Código de Comercio, el cual dispone que **“Todo suscriptor de un**

título valor se obligará autónomamente. Las circunstancias que invaliden la obligación de alguno o algunos de los signatarios, no afectarán las obligaciones de los demás.”

Conforme con lo expuesto, cabe aclarar que en la relación documental o cartular se descubre, entre sus intervinientes, la doble relación jurídica, así, una relación causal, básica o fundamental, que es el negocio jurídico subyacente que generó la relación entre las partes, que puede ser una compraventa, un mutuo, una donación, etc. y, por otra parte, una relación cartular, resultante del documento emitido con características y efectos propios que origina acciones también diversas de las que resultan de la relación fundamental o básica, precisamente, es aquí donde opera en toda su lucidez el principio de la autonomía, por eso con toda razón, ha dicho el maestro Bernardo Trujillo: *“La autonomía activa. Por este aspecto, la autonomía emerge de la propia definición de título valor (art. 619). Ella no es otra cosa que la facultad de recibir y poder ejercer un derecho cartular originario y no derivado del endosante...²”*

4. De las instrucciones para llenar los títulos valores incoados o en blanco.

Otro de los principios rectores de los títulos valores es el de la literalidad, consagrado en el artículo 626 del Código de Comercio. Según este brocardo, el suscriptor de un título queda obligado *“conforme al tenor literal del mismo”*, a menos que realice **la suscripción con salvedades compatibles con su esencia**. La anterior aseveración, unida a la firma del obligado, hace presumir como cierto el derecho incorporado en el título valor; circunstancia que no se opone a que el creador del título haga entrega a un tenedor del documento incoado o con espacios en blanco para que **sea él quien lo complete o llene**, acatando en forma estricta las instrucciones que se le entreguen para el efecto (art. 622 del Código de comercio).

Esto significa que el tenedor no podrá presentar el título valor con espacios en blanco o con la sola firma del creador para ejercitar tales derechos, esta concepción, se enlaza, con lo explicitado por el maestro Bernardo Trujillo Calle: *“...porque si al presentarse para el ejercicio del derecho aún tiene espacios en blanco, no podrá hacerse valer por falta de requisitos como título valor (...) quiere esto decir que no hay una segunda oportunidad para cumplir con la formalidades que la ley exige...³”*

². TRUJILLO, Bernardo. De los Títulos Valores. Tomo I, parte general, décimasexta edición. Pág., 63

³. De los Títulos Valores, T. I parte general.

De este modo, el art. 622 Co. de Comercio otorga una facultad para quien ha creado o negociado un título de estas características, o mejor expresado, el legislador patrio se refiere al tenedor legítimo, es decir, aquella persona que según la ley puede ejercer los derechos incorporados en el título y, por consiguiente, le asiste el derecho de llenar los espacios en blanco, pero también es cierto que “...para que el título, **una vez completado**, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, **deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello...**”, nótese entonces cómo, del anterior aparte legal transcrito, se exige en el título valor (pagaré) su completud escritural para poder enarbolar su efectividad cambiaria, llenado que debe cumplirse “conforme a las instrucciones del suscriptor” o “de acuerdo con la autorización dada para ello”.

Por avenirse al caso, se relleva también lo señalado por la H. Corte Suprema de Justicia respecto a la exigencia de la completividad del título valor para ejercer el derecho, ya que: “...**quien suscribe un título valor con espacios en blanco se declara de antemano satisfecho con su texto completo**, haciendo suyas las menciones que se agregan en ellos, pues es consciente que el documento incompleto no da derecho a exigir la obligación cambiaria, luego está autorizando al tenedor, inequívocamente, para completar el título, a fin de poder exigir su cumplimiento, aunque, esto es claro, debe aquel ceñirse a las instrucciones que al respecto se hubieran impartido (...)”⁴

5. Del caso concreto. Se duele la parte ejecutada de que el señor Juan Sebastián Berger Castrillón diligenció de manera arbitraria los espacios en blanco dejados en el pagaré presentado para el cobro, pues, en su sentir, el proceso carece de prueba suficiente de la cifra final que presenta en el pagaré, hechos que, a voces de la parte demandada, estructuran más que un incumplimiento de las instrucciones para llenar el título, un engaño para obligarse sin saberlo, por demás, persiste el togado en señalar que, a la postre, el negocio no tiene una causa y tan solo se quedó en una negación indefinida.

Ante el recelo que muestra en su interrogatorio de parte cada uno de los ejecutados, debe iterarse que los títulos valores pueden **girarse con espacios en blanco**, pues así lo permite la regla 622 del Código de Comercio. En este evento, pueden ocurrir diversas situaciones para poder ejercitar los derechos cambiarios correspondientes: **i)** que el obligado, al momento de la creación del instrumento

⁴. (sent. 20 de marzo de 2009, exp. T. No. 00032) se subraya.

negociable, **otorgue carta de instrucciones para llenarlos, evento en que el tenedor del mismo, debe llenar tales espacios de conformidad con las instrucciones recibidas;** ii) también puede ocurrir que no se dio esa carta de instrucciones, en ese preciso momento del que se habla, pero con posterioridad se dieron ya por escrito, ora verbalmente; en este caso, como en el anterior, **es de incumbencia del obligado probar que se dieron esas instrucciones y la medida en que ellas se pretermitieron por el acreedor cambiario**, ello, por cuanto, a partir de la invocación de cualquiera de estos planteamientos por parte del ejecutado, no está simplemente negando los hechos afirmados por el ejecutante, sino que está alegando hechos impositivos o extintivos de la obligación cobrada por el ejecutante.

5.1. Sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 30 de junio de 2009⁵, que no por inveterada deviene desactualizada, sostuvo lo siguiente:

*“...una vez presentado un título valor, conforme a los requisitos mínimos de orden formal señalados en el Código de Comercio para cada especie, el deudor invoca una de las hipótesis previstas en la norma mencionada **le incumbe doble carga probatoria:** en primer lugar, **establecer que realmente fue firmado con espacios en blanco;** y, en segundo, **evidenciar que se llenó de manera distinta al pacto convenido con el tenedor del título.**”*

*Lo anterior aflora nítido si se tiene en cuenta, conforme a principios elementales de derecho probatorio, **que dentro del concepto genérico de defensa el demandado puede formular excepciones de fondo, que no consisten simplemente en negar los hechos afirmados por el actor, sino en la invocación de otros supuestos de hecho impositivos o extintivos del derecho reclamado por el demandante; de suerte que al ejercer este medio de defensa surge diáfano que el primero expone un hecho nuevo tendiente a extinguir o impedir los efectos jurídicos que persigue este último, enervando la pretensión. ...***

***Adicionalmente le correspondería al excepcionante explicar y probar cómo fue que el documento se llenó en contravención a las instrucciones dadas...”** (Exp. 1100102030002009 – 01044 – 00).*

Por ende, el hecho de que se hubiera demostrado que en un comienzo no hubo instrucciones para llenar los espacios en blanco de las referidas letras,

⁵ Ref: Exp. No. T-05001-22-03-000-2009-00273-01. M. P. Edgardo Villamil Portilla.

era cuestión que por sí sola no les restaba mérito ejecutivo a los referidos títulos, pues tal circunstancia no impedía que se hubiesen acordado instrucciones ulteriores para hacer posible el diligenciamiento del título y su consiguiente exigibilidad.

No podía, entonces, invertirse la carga de la prueba **para dejar a hombros del acreedor el deber de acreditar cómo y porqué llenó los títulos**, sino que aún en el evento de ausencia inicial de instrucciones debían los deudores demostrar que tampoco las hubo con posterioridad o que, en todo caso, **el acreedor sobrepasó las facultades que la ley le otorga para perfeccionar el instrumento crediticio en el que consta la deuda atribuida a los ejecutados**

A la larga, si lo de que se trata es de enervar la eficacia de un título valor, el compromiso del deudor que lo firma con espacios en blanco, debe ser tal que logre llevar a la certeza sobre la discordancia entre su contenido y la realidad negocial, **pues no de otra forma podría librarse de la responsabilidad que trae consigo imponer la rúbrica de manera voluntaria en este tipo de efectos comerciales...**

5.2. Si ello es así, cuando de fulminar la obligación cobrada se trata, es claro que la parte ejecutada bien puede oponerse a la ejecución demostrando las realidades del negocio jurídico subyacente que dio lugar a su creación que, a la postre, es hacia donde apunta esta excepción, dado que, como ya tuvo oportunidad de precisarse, las partes del proceso resultan ser las mismas que celebraron el mandato o contrato de administración ante cuya ejecución surgió que los demandados -como garantía de su cumplimiento- otorgaron un pagaré en blanco para ser llenado por el tenedor, lo que habilitaba a los demandados proponer las excepciones personales y reales contra el ejecutante, de conformidad con los numerales 12 y 13 del artículo 784 del Código de Comercio.

5.3. Bien, aquí no cabe duda alguna de que el pagaré que vertebra el presente proceso de ejecución presentado por el señor Juan Sebastián Berger Castrillón está redactado en idioma español, contiene expresiones en números y en letras y de ellos se deduce con total claridad que los ejecutados se obligaron pagar en forma incondicional al ejecutante, la suma de \$321.418.056, cifra que ya contiene la imputación de un abono que realizaron los ejecutados por valor de \$57.500.000, más los intereses de mora a la tasa máxima legal; es claro, además, que el suscriptor firmó el pagaré con espacios en blanco y autorizó para que la cuantía por la cual sería llenado fuera “...igual al monto en general por las acreencias laborales,

deudas, e indemnizaciones, cualquier erogación que haga por cualquier concepto, incluidos los intereses y en caso de cobro judicial o extrajudicial serán de nuestra cuenta los costos y gastos de cobranza incluidos los honorarios de abogado los que desde ahora fijo y acepto en el veinte por ciento (20%) de las pretensiones de la demanda...”. (cfr. pdf. 03 folio 03)

En efecto, eso fue lo que hizo el demandante, esto es, y como el mismo lo afirmó, que llenó el pagaré de acuerdo con esas genéricas instrucciones, sin que de ahí pueda seguirse la falta de claridad que alegan los demandados, como queriendo significar que el señor Sebastián Berger Castrillón a modo de rendición de cuentas o de liquidación de los valores por los cuales fue autorizado a llenar el pagaré, adquirió la carga o deber de aportar la documentación que demostrara valores finales con los cuales llenó el pagaré, conducta a la que no estaba comprometido de forma contractual, y que tampoco como tenedor legítimo del pagaré legalmente le es exigida, siendo la parte ejecutada la que debía desvirtuar la obligación cambiaria, cuya eficacia deriva de la firma puesta en un título valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable.

5.4. De suerte que ese acontecimiento, por sí solo, de que la letra tenía espacios en blanco, no constituye una excepción ni nada que se le parezca. La razón es sencilla: nuestro sistema jurídico autoriza la entrega de títulos valores firmados en blanco o con espacios en blanco, luego, tal comportamiento ni está prohibido ni tiene consecuencias para alguna de las partes, mucho menos puede decirse que el hecho de llenar los espacios en blanco constituya una adulteración del título o que ese proceder pueda calificarse de fraude o falsedad.

5.5. El juez del caso, simplemente dio aplicación desde la admisión de la demanda a través del mandamiento de pago, a las reglas que acaban de señalarse y no encontró que tuviera que huir a otro documento extraño al título para completar la aptitud compulsiva del mismo. De ahí que tampoco le asiste razón alguna a la recurrente, quien pretende persuadir a esta Sala del Tribunal, de que, al día de hoy, sus clientes no han podido saber de dónde resultó esa liquidación sobre las obligaciones que se tenían con el actor y por las cuales éste terminó llenando los pagarés, fuera del control del firmante. Pero no para ahí la inconformidad del apelante, pues, alude a que el señor Diego Serrano fue engañado para firmar el pagaré, ya que él siempre creyó que estaba firmando un poder para iniciar un proceso de divorcio, afirmación hecha al garete y sin ningún apoyo probatorio.

5.6. Y es que cuando el señor Serrano Martínez se aferra al desconocimiento de lo que firmaba y, por repercusión, entiende que fue engañado por su entonces amigo y administrador para firmar un pagaré en blanco, comenta que el demandante aprovechó la confianza que le tenía y frente a la premura o afán por llegar al aeropuerto para viajar a su lugar de domicilio en Huesca-España, aprovechó Juan Sebastián y puso sobre la mesa el documento para firmarlo, hecho que no fue discutido por la parte demandada al interior del presente juicio hipotecario y tan siquiera mostró inconformidad sobre su autoría o autenticidad para tacharlo de falso, sino que guardó silencio al respecto.

También debe recordarse que, de conformidad con el artículo 1502 y 1508 del Código Civil, es nulo relativamente aquel negocio en el cual el consentimiento de una o ambas partes está viciado por **error**, fuerza o **dolo** y, por virtud del artículo 1743 *ib.*, concordado con el artículo 282 y 442 del C. G. del P., la nulidad relativa no puede ser declarada de oficio por el juez, sino a pedimento de parte en cuyo beneficio la ha establecido la ley, pero ocurre que ésa no es la discusión, jamás fue formulada en la demanda y, por ende, no puede ser objeto de pronunciamiento y tampoco compete examinar el punto por ministerio de la Ley.

6. Ahora bien, no puede soslayarse que una serie de contratos de administración sobre taxis y bienes raíces (cfr. pdf 28), signados por los aquí demandados con el actor, finalmente, fueron conjuntados al proceso y presentados como manantial de la obligación soportada en el pagaré, pudiéndose leer:

JULIA PATRICIA RIOS HOYOS, mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía N. 35.696.165 de ISTMINA-CHOCO, y como representante legal de BOIRA S.A.S. identificada con el NIT. 900515860 radicado en la cámara de comercio de aburra sur, que en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y JUAN SEBASTIAN BERGER C. mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 1.128.274.072., domiciliado en MEDELLIN-ANTIOQUIA, y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE VEHICULOS, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA en su condición de ciudadano colombiano debidamente identificado y en calidad de comerciante independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar la administración y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en:

LA ADMINISTRACIÓN DE UN (14) VEHICULOS TIPO TAXI, IDENTIFICADOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PLACAS:

STW553
STW554
STW555
STW556
STW557
STW558
STW559
STW560
STW561
STW562
STW740
STW741
STW743
STW744
STW745

MARCA: KIA STYLUS
MODELO: 2012-2013
COLOR: AMARILLO
EMPRESA AFILIADORA: TAX-COOPEBOMBAS

EL SERVICIO DE ADMINISTRACION INCLUYE:

- El pago de las obligaciones propias del vehículo, con fondos procedentes del dinero producido por el mismo.
- La supervisión durante las 24 horas del día 7 días a la semana del normal funcionamiento del vehículo tipo taxi y el cual debe estar vinculado a un monitoreo satelital el cual el propietario debe adquirir y pagar mensualmente adicional al contrato.
- La selección de los conductores que operaran los vehículos, de servicio público durante 2 jornadas, en el día y la noche respectivamente.
- El recaudo y posterior consignación de los dineros producidos por el vehículo durante el trabajo que desempeñe el mismo.
- La responsabilidad de supervisar la preservación del patrimonio representado y velar por las respectivas soluciones mecánicas del mismo. SALVO el deterioro natural por el uso de acuerdo al servicio que presta el vehículo objeto de este contrato.
- La asesoría jurídica por intermedio del administrador para la resolución de inconvenientes.
- La empresa afiliadora, el propietario y la compañía de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual son solidariamente responsables de adelantar la solución integral de eventualidades que incluyan o relacionen los vehículos aquí contenidos.

NOSOTROS, **JULIA PATRICIA RIOS HOYOS** IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO **35.696.165** DE ISTMINA – CHOCO, Y **DIEGO SERRANO MARTINEZ** CON CEDULA DE EXTRANJERIA **541.583**, CON RESIDENCIA PERMANENTE EN **HUESCA – ESPAÑA**, HACEMOS CONSTAR EN LA FECHA, QUE EL SEÑOR **JUAN SEBASTIAN BERGER CASTRILLON**, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO **1.128.274.072** DE MEDELLIN – ANTIOQUIA ES NUESTRO **DELEGADO Y REPRESENTANTE** PARA ASUNTOS GENERALES QUE DETALLAMOS A CONTINUACION:

- ADMINISTRACION DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO TIPO TAXI
 - TAX COOPEBOMBAS
 - TAX INDIVIDUAL
 - TAX BELEN
- APODERADO Y TOMADOR DE LOS SEGUROS PATRIMONIALES CON LAS DISTINTAS COMPAÑIAS QUE CUBREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE NUESTRA PROPIEDAD:
 - SURAMERICANA DE SEGUROS
 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
 - SEGUROS LA EQUIDAD
 - ALLIANZ SEGUROS
- RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO, OPERACIÓN, Y SERVICIOS GENERALES DEL VEHICULO FAMILIAR HPK677. TOYOTA FORTUNER GRIS PLATA MODELO 2014.
- ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO Y EL PAGO DE GASTOS E IMPREVISTOS EN EL INMUEBLE LOCALIZADO EN LA CRA 84F #3D 150 INTERIOR 315 T9. REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE ADMINISTRACION, Y ACREEDORES RELACIONADOS. APODERADO PARA LA COMPRA, PAGOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCTORA “VIVIENDAS Y PROYECTOS”, FIRMA DE ESCRITURAS EN LA NOTARIA 15, HIPOTECA, Y EQUIPAMIENTO GENERAL.
- ENCARGADO EN PROYECTO AVANI/ SECTOR SAN JULIAN, PARA LA COMPRA, PAGOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCTORA “VIVIENDAS Y PROYECTOS”, FIRMA DE ESCRITURAS EN LA NOTARIA 15, HIPOTECA, Y EQUIPAMIENTO GENERAL.
- RESPONSABLE DE RECOPILAR LA INFORMACION TRIBUTARIA Y PRESENTAR DECLARACION DE RENTA ANTE LA DIAN, CONTRATANDO LOS SERVICIOS DE UN CONTADOR TITULADO.
- REPRESENTANTE SUPLENTE, DE LA SOCIEDAD BOIRA S.A.S. NIT. 900515860 DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR, RESPONSABLE DE ATENDER LAS NOVEDADES EMERGENTES Y RESOLVER LOS PENDIENTES ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS.
- ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS GENERALES PARA LA FAMILIA SERRANO RIOS.

EL SEÑOR **JUAN SEBASTIAN BERGER CASTRILLON** EJECUTA SUS TAREAS DE FORMA ININTERRUMPIDA DESDE EL **10 DE ABRIL DE 2013**, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA VIGENTE Y DE FORMA INDEFINIDA EN SUS LABORES, Y ESTA OBLIGADO A SOMETERSE A AUDITORIAS Y PRESENTAR INFORMES PERIODICOS REFERENTES A LA GESTION QUE DESEMPEÑA.

SIN OTRO PARTICULAR:

JULIA PATRICIA RIOS HOYOS
CC. 35.696.165

DIEGO SERRANO MARTINEZ
C.E. 541.583

6.2. La eficacia probatoria de esta documental no logró ser desvirtuada por la parte ejecutada, por el contrario, de lo declarado por la señora Julia Patricia Ríos Hoyos y Diego Serrano Martínez surge como un hecho cierto que fueron diversos los negocios celebrados entre demandante y demandados, no solo a través de BOIRA SAS, sino de modo personal, a ello alude expresamente la señora Julia Ríos, denotando entonces un fluir de relaciones mercantiles que incluyeron entrega y manejo de dinero, administración de taxis en relación con supervisión, pago de salario, de seguridad social de conductores, atender choques, mantenimiento, vigilancia y control de los vehículos, impuestos, comparendos etc., **comisiones por la venta de taxis y, también negocios de administración de propiedad raíz**, relaciones que perduraron durante más de 6 años y que eran dirigidos personalmente por el señor Sebastián Berger Castrillón, en razón a que los propietarios de los activos residían en Huesca España.


6.3. Las reflexiones teóricas que en este punto hizo el funcionario a quo no merecen ningún reproche, pues nada se definió, sobre lo atinente a la existencia de determinada relación laboral entre las partes de la *lid*, labor esta que se halla reservada al juez natural de la causa, pero lo que sí se puede establecer fácilmente, es que no fue solo una, sino una sumatoria de transacciones y relaciones entre las partes que bien pudieron desconocer los testigos Susana Correa Ríos y Jhon Fredy Ríos Hoyos, como ellos mismos lo reconocen, pues si bien dicen saber del contrato de administración de los taxis de propiedad de Julia Ríos, tía materna y hermana de los deponentes, sin embargo, respectivamente, dicen no tener detalles sobre todo el desenvolvimiento contractual ocurrido entre las partes durante los años 2013 al 2019, máxime cuando lo que saben respecto a los bienes inmuebles y la comisión ofertada y aceptada por la ventas de los taxis, lo escucharon del señor Diego Serrano, lo que los convierte en testigos de oídas frente a esos hechos.

6.4. Destáquese que, en vigencia de todo ese acontecer contractual, la señora Susana Correa Ríos, en calidad de nueva apoderada general de la ejecutada Julia Patricia Ríos Hoyos, mediante cruces epistolares con el aquí demandante, le solicita a éste una certificación sobre sumas adeudadas, a fin de presentarlas como pasivo a la DIAN, para la declaración de renta correspondiente al año 2018, a lo que éste le certifica la cifra de \$45.461.061, explicándole que obedece a sumas no cubiertas por las utilidades derivadas de los activos, tal documental fue allegada también por la parte demandada:

La Sra. **JULIA PATRICIA RÍOS HOYOS** identificada con cedula de ciudadanía # **35.696.165** expedida en **ISTMINA – CHOCO**, ADEUDA a la fecha, la suma de: Cuarenta Y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta Y Un Mil Y Sesenta Y Uno Pesos M/C (\$ **45.461.061**) correspondiente al **CAPITAL sin incluir INTERESES CORRIENTES**, Al sr. **JUAN SEBASTIAN BERGER CASTRILLÓN** por concepto de: **CARTERA DEFICITARIA NO PAGADA**, derivada de gastos mayores a las utilidades generadas durante la administración de activos.

Este documento fue solicitado por la Sra. **SUSANA CORREA RÍOS**, identificada con CC: **1.037.579.185**, ABOGADA quien obra como apoderada general de la Sra. **JULIA PATRICIA RÍOS HOYOS** mediante escritura pública # 320 de la NOTARIA 4 de MEDELLIN.

SIN OTRO PARTICULAR:



U. 1179274142

JUAN SEBASTIAN BERGER CASTRILLÓN
CC: 1.128.274.072

RECIBE:



SUSANA CORREA RÍOS CC 1037579.185
CC: 1.037.579.185

6.5. Como todos estos documentos hacen parte del as probatorio del proceso, incluyendo los colacionados por la misma parte ejecutada, en donde también se detallan las gestiones realizadas por el señor Juan Sebastián Berger, a solicitud de los mismos ejecutados, sobre todo de la señora Julia Patricia Ríos Hoyos, en asuntos relacionados con la venta de taxis “*cuya venta estaba a cargo*” de aquél y la administración de otros bienes distintos a los vehículos, al menos sirven como hecho indicador de la causa fundante del pagaré y de la obligación dineraria en él contenida, con lo que resulta creíble el cálculo de la deuda por acreencias laborales y muchos otros conceptos que hace el ejecutante, sin que deba el tribunal acometer un estudio acerca de la especie de contrato celebrado entre ellos para descifrar si era de carácter laboral o no, pues, abrazados por la máxima confianza fue que las partes acordaron que dicha administración iban a tomarla como una relación laboral y eso es suficiente, a lo que se suma que también le encargaron la venta de los vehículos taxis por cuya intermediación prometieron pagar una comisión, sin que la parte demandada haya presentado pruebas del pago de la misma, fue por eso que procedió a llenarlo, de ahí que la parte ejecutada no haya desvirtuado que la cifra por la cual fue llenado no correspondiera a la realidad contractual.

6.7. Es válida entonces la pregunta: ¿es conducente la prueba documental y testimonial que reposa en el expediente, para desvirtuar la cifra final incorporada en pagaré como para declarar la inexistencia o la extinción del negocio causal? La respuesta es clara: No. Todo lo contrario, los documentos y contratos allegados por la parte actora, así como lo declarado por los directamente involucrados, se hallan relacionadas de modo directo con una causa justificante del pagaré que, al tiempo, soporta la cifra por la cual fue llenado.

6.8. En verdad, resulta contrario a la lógica que una persona que se mueve en el comercio, acostumbrada a manejar negocios que suponen grandes capitales, resulte firmando alegremente títulos valores sin causa alguna que fundamente la obligación asumida, por lo que tampoco se admite como un argumento atendible para desvirtuar el génesis del pagaré, el simple hecho de que no sabía el documento que firmaba, ya que desconocía las leyes colombianas sobre la materia o que su gran amigo lo timó, sin colacionar prueba de sus afirmaciones.

6.9. Se memora lo que ha señalado la jurisprudencia en materia probatoria para quien, habiendo sido llamado a un proceso, presenta excepciones con las cuales pretende discutir o desconocer asuntos propios del negocio subyacente, pues, en

palabras de la Corte: “...en concordancia con lo que se viene diciendo, tocante con la carga de la prueba, **ha de verse cómo el artículo 1757 del Código Civil prevé que “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”** (...) En consecuencia, deviene palmario que es de cargo de las partes probar a cabalidad la existencia de sus obligaciones o su extinción, cuando así lo invoquen como supuestos de su acción o excepción, y ello, valga repetirlo, no es más que una aplicación del principio de la carga de la prueba en orden al cual le compete al sujeto procesal que reclama unos hechos forzosamente evidenciarlos, si aspira deducir algún beneficio a su favor... De ahí que, sobre el particular, haya enfatizado la Corte que “es un deber procesal demostrar en juicio el hecho o acto jurídico de donde procede el derecho o **de donde nace la excepción invocada**. Si el interesado en dar la prueba no lo hace, o la da imperfectamente, o se descuida, o se equivoca en su papel de probador, necesariamente ha de esperar un resultado adverso a sus pretensiones” (G. J. T, LXI, pág. 63).”.⁶

En igual sentido la Corte Constitucional sobre el tópico ha precisado que: “...si el deudor **opta por hacer oponibles asuntos propios del negocio subyacente**, le corresponderá probar (i) las características particulares del mismo; y (ii) las consecuencias jurídicas que, en razón de su grado de importancia, tienen el estatus suficiente para afectar el carácter autónomo y la exigibilidad propia del derecho de crédito Incorporado en un título valor. (...) **Así, toda la carga de la prueba se impone exclusivamente al deudor, al ejecutado que propone la excepción**” (Sentencia T-310 del 30 de abril de 2009)”

Como viene de verse, es obvio que el *onus probandi* era una carga que por entero, no cumplieron los ejecutados, toda vez que su defensa se limitó a imputar el indebido diligenciamiento del pagaré, sin identificar qué aspectos, requisitos o espacios específicos fueron completados sin la observancia de las condiciones contenidas en la carta de instrucciones, carga que pudieron haber cumplido a través de una contabilidad o liquidación de los distintos créditos, mientras que, por el contrario, como se vio, es diáfano el documento en indicar, en qué casos el tenedor del título lo podrá completar y qué criterios debería tener en cuenta para su diligenciamiento.

7. De lo hasta aquí argumentado, no se sigue otra cosa que acompañar en forma íntegra la decisión de primera instancia, razón por la cual será confirmada. De igual forma, se deberá condenar en costas a la parte recurrente, tras la resolución desfavorable de su recurso.

⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, 30 de junio de 2009, expediente 01044

Así, sin necesidad de más consideraciones, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, el día 23 de noviembre de 2022, dentro de la presente acción ejecutiva, de conformidad con las consideraciones en que está sustentada la presente providencia.

SEGUNDO. Se condena en costas a la parte demandada recurrente, para el efecto, en su momento procesal, se fijarán las respectivas agencias en derecho por el magistrado sustanciador.

TERCERO. Cumplida la ritualidad secretarial de rigor, devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado



PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
Magistrada



JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado